



14 de abril de 2016

Hon. Miguel A. Pereira Castillo  
Presidente  
Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos  
Senado de Puerto Rico  
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Presidente:

La Oficina de Gerencia y Presupuesto presenta los comentarios relacionados al **Proyecto del Senado Núm. 1586**, que propone enmendar los Artículos 2, 5 y 6 de la Ley 144-1994, según enmendada, conocida como la "Ley para la Atención Rápida de Llamadas de Emergencias 9-1-1 de Seguridad Pública" o la "Ley de Llamadas 9-1-1", a los fines de ampliar el alcance del cargo básico por el servicio 9-1-1; destinar una porción de los recaudos de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 para el pago de las ambulancias aéreas; incorporar definiciones; y para otros fines relacionados.

La Exposición de Motivos de la medida plantea que la Ley 144 tiene el propósito de hacer viable la implementación de los medios y tecnologías dentro de las agencias de seguridad pública para atender de manera rápida y eficaz las llamadas de emergencia de la ciudadanía. En términos generales, la medida propone actualizar la Ley 144, tomando en consideración que las nuevas tecnologías traen consigo un mayor alcance para los usuarios, de manera que se logre que el recobro del cargo por las llamadas 9-1-1 refleje los adelantos en la telefonía, aplicando este cargo uniformemente en todo aquel servicio telefónico que tiene la capacidad, actual y futura, de realizar llamadas al Sistema 9-1-1. Además, la medida llama la atención a que gran cantidad de llamadas atendidas a través del Sistema 9-1-1, son relacionadas con emergencias médicas, las cuales, en ocasiones, son atendidas utilizando el servicio de ambulancias aéreas. Añade la medida que las ambulancias médicas están siendo sufragadas por el Departamento de Salud, el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico (CEM) y, en los casos que sean elegibles, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), de su propio presupuesto. Por lo que, en vista de los retos económicos y fiscales que enfrenta el país, este Proyecto de Ley busca dirigir parte de los fondos que se recaudan a beneficio del Sistema 9-1-1, para cubrir los gastos de contratación para el uso de ambulancias aéreas que atiendan emergencias que hayan sido notificadas por el Sistema.

Nuestra Oficina ha evaluado el presente Proyecto de Ley, desde el punto de vista de nuestra área de competencia técnica. Consecuentemente, entendemos imprescindible llamar la atención sobre varios particulares.

En primer lugar, en términos gerenciales, debemos indicar que la Ley 144-1994, *supra*, crea la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. Este Organismo reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de atención de llamadas del público al 9-1-1, así como al 3-1-1 y la distribución de dichas llamadas a las





agencias de Seguridad Pública, las demás agencias o instrumentalidades, otros proveedores de servicios de emergencias o de cualquier otro tipo que sean autorizados por las agencias y la Junta para su eficaz atención. La misión de la Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1, es reducir el tiempo que toma a los ciudadanos comunicarse con las agencias de seguridad pública o agencias de respuestas para ponerlas en conocimiento inmediato de las emergencias ciudadanas a su cargo, para que dichas agencias envíen sus recursos autorizados a atenderlas, a través de la línea 9-1-1. Además, proporciona al ciudadano acceso rápido a los servicios, información y trámites que ofrecen las agencias del gobierno, mediante un número fácil de recordar, como lo es el 3-1-1.

Ahora bien, la medida propone enmendar la Ley, añadiendo una definición amplia de “línea telefónica” para aplicar de manera uniforme el cargo y abarcar todas las posibilidades que la nueva tecnología trae consigo. Ello potencialmente aumentaría los ingresos de la Junta al expandir el universo al que se le cobra el cargo. Nótese, no obstante, que no se hace una excepción para las líneas que son contratadas por entes gubernamentales. Consecuentemente, y ante el posible aumento que pueda traer este cambio en los servicios de telefonía del gobierno, sugerimos que se excluyan las líneas de teléfono del gobierno de la aplicación del mismo.

Además, se fija el cargo aplicable a las líneas fijas prepagadas, en este caso, se autoriza a las compañías a pasar el costo del cargo establecido a los consumidores. Sobre el particular, recomendamos que se consulte con el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo) y con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, las cuales tienen pericia sobre estos temas, para que se expresen sobre los aspectos sustantivos de lo aquí propuesto, así como de las implicaciones a nivel del consumidor que esto podría conllevar.

Por otro lado, según mencionáramos previamente, la medida estudiada también busca que, ante la crisis fiscal que atraviesa el País, se puedan usar parte de los fondos recaudados para costear el uso de ambulancias aéreas que es contratado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para atender las emergencias médicas que son notificadas por el Sistema de Llamadas 9-1-1. Según se explica, la presente medida pretende aliviar la carga de los costos relacionados con estas contrataciones, de los presupuestos del Departamento de Salud, del CEM y, en los casos que sean elegibles, de la ACAA, quienes sufragan estos costos. Conforme con ello, se propone modificar la distribución y uso de los fondos recaudados por concepto de cargos a los abonados telefónicos, para permitir que estos fondos sean dirigidos a municipios y compañías que son contratadas por el Gobierno.

Ante ello, es nuestra responsabilidad llamar la atención a que esta medida enmendaría la Ley 144, *supra*, de manera que el por ciento que está actualmente dirigido para los gastos individuales propios de las agencias de seguridad, en atención a las llamadas al 9-1-1, sean dirigidos además, para “municipios integrados” y para el pago de las ambulancias aéreas contratadas por el Gobierno que hayan sido convocadas a través del Sistema 9-1-1 y/o autorizadas por el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico y que no sean elegibles para pago por la ACAA o cualquier otra instrumentalidad, corporación pública o privada, o compañía de seguros. Conforme con ello, el Proyecto de Ley ante nuestra consideración aumenta el por ciento dirigido a las agencias de seguridad de un 40 a un 46%, es decir que solo se aumenta en un 6% y ahora sería fragmentado en varias partidas adicionales.





Sobre lo anterior, es importante tomar en consideración la difícil situación que atraviesa el Gobierno. La crisis fiscal que atravesamos ha llegado al momento más crítico en la historia. No obstante las medidas abarcadoras y sin precedente que ha puesto en vigor esta Administración en los pasados tres años para reencaminar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) hacia la recuperación económica y la sostenibilidad fiscal, la falta de acceso a los mercados de capital, el elevado nivel de deuda, y el deteriorado clima económico que persiste, han llevado a las finanzas del Gobierno de Puerto Rico a un punto de inflexión. La escasez en los recursos y la limitada liquidez, amenazan con obligar al Gobierno de Puerto Rico a tener que escoger entre honrar compromisos con nuestros acreedores o continuar proveyendo servicios básicos y esenciales al pueblo de Puerto Rico.

Ante la falta de recursos disponibles suficientes, recientemente, se firmó el Boletín Ejecutivo OE-2015-046, mediante el que se establece la retención de una porción de los ingresos asignados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) para el pago de la deuda pública. Esta Orden también decreta que la Compañía de Turismo habrá de transferir parte de los ingresos recaudados para el pago de ciertas obligaciones de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCC) al Departamento de Hacienda (DH) para el pago de la deuda pública. Es importante notar que dicha Orden Ejecutiva se fundamentó en el Artículo VI, Sección 8, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conocido como el “*clawback clause*”.

Adicionalmente, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 21-2016, conocida como “Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico”, la cual dispone la declaración de un estado de emergencia fiscal por la Asamblea Legislativa; instaura los procesos de declaración, establecimiento y condiciones del periodo de emergencia, según definido por esta Ley, para el Banco o cualquier otra entidad gubernamental.

Esta situación requiere extrema medida al realizar cualquier asignación o gasto, particularmente cuando las mismas van dirigidas a contrataciones nuevas. La política pública de esta Administración ha sido firme en cuanto a la necesidad de reducir la contratación y la compra de servicios a través del Gobierno. Conforme a ello, sugerimos que se evalúe el lenguaje que permitiría a la Junta separar o utilizar partidas para el pago de ambulancias. Nótese que, según reconoce la medida, este tipo de contratación le corresponde principalmente a otras agencias gubernamentales cuyos presupuestos se sufragan mayormente del Fondo General, a saber el Departamento de Salud y el Cuerpo de Emergencias Médicas. Por lo que, en todo caso, debe disponerse expresamente que los fondos destinados a tales fines deben ser distribuidos a estas entidades en proporción a los servicios prestados.

Por otro lado, incluir este nuevo objeto de gasto dentro del por ciento dirigido a las agencias de seguridad hace que el gasto sea difícil de monitorear y fiscalizar, ya que queda en una partida que no es objeto de enmienda o revisión en el proceso presupuestario anual. Además, la medida, según redactada, no aclara qué por ciento sería destinado específicamente al pago de ambulancias aéreas. Llamamos la atención a la importancia de que toda legislación sea evaluada cuidadosamente, de manera que se asegure el buen uso de los limitados recursos públicos, por lo que debe aclararse el por ciento mínimo específico disponible

para el pago de ambulancias aéreas, y que el mismo vaya dirigido directamente a las entidades que sufragan los servicios que se nutren del Fondo General. De esta forma, se evitaría un aumento no considerado en el gasto no relacionado al loable fin de contribuir a paliar el gasto público en la contratación de ambulancias aéreas.

Asimismo, vemos que la medida bajo estudio no dispone cuáles han de ser los “municipios integrados”, y cómo se define dicho término. Por tal razón, entendemos indispensable explicar que el lenguaje utilizado en la presente propuesta legislativa permitiría la desviación de fondos que actualmente reciben las agencias de seguridad en atención de llamadas 9-1-1, para usos que no son detallados en la medida. Ante ello, resulta meritorio sugerir que se incluya en la Exposición de Motivos la razón por la cual se propone establecer dicha erogación de dinero y definir claramente, en la parte decretativa de la medida, qué significa el término “municipios integrados”, cuáles han de ser éstos, por cuáles servicios al Sistema 9-1-1 se les estaría pagando y cuánto dinero de los fondos distribuidos según la enmienda propuesta, han de estar dirigidos específicamente a los mismos.

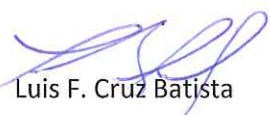
Adicionalmente, es menester señalar que esta enmienda también podría afectar las cantidades que eventualmente pasarán a ser distribuidas entre las agencias de seguridad. Ante ello, resulta importante aclarar el particular para asegurar que el presupuesto de dichas entidades no se vea afectado. Por lo que, sugerimos que la presente pieza legislativa sea consultada con las agencias de seguridad que se verían afectadas por la aprobación de esta medida a modo de determinar la magnitud del impacto, si alguno, que lo propuesto podría tener en sus presupuestos operacionales.

En términos presupuestarios, entendemos pertinente mencionar que el presupuesto consolidado de la Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1, aprobado para el Año Fiscal 2015-2016, asciende a \$21,686,000, provenientes de Otros Ingresos. Estos recursos provienen de las remesas enviadas por las compañías telefónicas por concepto de los cargos a sus abonados para el pago del Servicios de Emergencia 9-1-1 y del cobro por los servicios a las agencias integradas a la Línea de Servicios a la Ciudadanía 3-1-1. De estos recaudos, la Junta podrá disponer para los gastos individuales propios de las agencias de seguridad en la atención de las llamadas al 9-1-1, según dispuesto en el Reglamento Núm. 5303 de la Junta de Gobierno del 9-1-1. Ante ello, sugerimos además que se consulte con la Junta de Gobierno del 9-1-1, acerca de lo propuesto en esta medida, y sobre su capacidad para cumplir con ello.

En base a todo lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra sugerencia de evaluar el lenguaje utilizado en la medida para asegurar el mejor uso de los fondos públicos, así como de consultar los particulares señalados sobre el mismo, con las agencias concernientes.

Esperamos que nuestros comentarios le sean de utilidad en su evaluación **Proyecto del Senado Núm. 1586.**

Cordialmente,



Luis F. Cruz Batista